

La lucha de clases en la sociedad chilena: Hipótesis para su interpretación

LILIANA DE RIZ

La historia reciente de Chile abre una serie de interrogantes sobre las diferentes estrategias políticas de transformación estructural de una sociedad dependiente, obligando a volver la atención sobre los aspectos que constituyen la especificidad de la dominación política en esa sociedad. Más precisamente, para descifrar la lógica del proceso que desembocó en la caída del gobierno popular no es suficiente la descripción de la política de la Unidad Popular y de los partidos de la izquierda chilena durante los tres años de gobierno. Cuando éste es el enfoque, el debate resulta estéril: sea porque se extrapolan teorías sobre la transición al socialismo sin preguntarse por las condiciones de su aplicabilidad en el contexto de la sociedad dependiente chilena; sea porque la discusión queda encerrada en el ámbito de la política en el sentido estrecho del término, es decir, como reflexión sobre tácticas diferentes para lograr la ampliación del poder político en determinadas coyunturas. En cualquiera de estos dos casos, la descripción del proceso tiende a convertirse en prescripción y se torna incapaz de dar cuenta del desenlace de la crisis.

Nuestro punto de partida para abordar el estudio del Chile de la Unidad Popular es la afirmación de la necesidad de inscribir ese análisis en el estudio más general de las formas de dominación política en esa sociedad dependiente. Este nos parece el camino para evitar caer en la fácil tentación de reducir el análisis a la expresión de preferencias ideológicas. Hasta ahora, la mayoría de los debates tendieron a centrarse en el proceso político de transición hacia una nueva sociedad que desencadenó la Unidad Popular. Durante los años 1970-1973, la sociedad chilena no sólo fue protagonista de este proceso, sino que además —y fundamentalmente— se encontró envuelta en la crisis del modelo político que había organizado su funcionamiento desde comienzos del siglo; crisis que precedió al acceso de la Unidad Popular al gobierno.

Este análisis se propone rastrear, a través de la historia de las formas de dominación política que hicieron de Chile una sociedad dependiente atípica en el contexto latinoamericano, la lógica del proceso de los tres años

del gobierno popular. En efecto, la sociedad chilena es una sociedad dependiente. Su modo de articulación dependiente en el sistema capitalista mundial revistió la forma del enclave minero. Sin embargo, esta sociedad de enclave conoció un modelo político excepcional, no logrado en las demás sociedades cuya forma de dependencia también fue el enclave, ni tampoco en las sociedades con control nacional del proceso productivo.¹ Preguntarse en qué consistió esta excepcionalidad implica plantearse cuáles fueron las condiciones que hicieron factible la realización en Chile, con mayor fortuna que en otros intentos latinoamericanos, de una dominación burguesa legítima, que resistió largamente a las duras pruebas de la realidad. Dar cuenta de cómo se gestó el "modelo político" chileno y de las razones de su continuidad obliga, a su vez, a abordar una cuestión central: quiénes fueron los actores legítimos en ese modelo y quiénes los excluidos con éxito, incluso apelando a la violencia, en cada etapa de su historia.

Este trabajo apunta a la historia reciente de Chile. Sin embargo, nuestra hipótesis afirma que *para que este análisis sea posible, es necesario historizar el estudio de la sociedad chilena, en el sentido de emprender la búsqueda de las condiciones pasadas que son eficaces para dar cuenta de las tendencias y direcciones de las transformaciones sociales allí ocurridas.* No se trata de recrear la historia ya conocida, sino de ubicar analíticamente aquellos acontecimientos y estructuras capaces de explicar el presente y "delinear" el futuro.

LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Adoptada esta perspectiva, nuestra idea consiste en que es necesario partir del proceso de creación de la sociedad nacional que sigue a la ruptura del pacto colonial. Una primera observación de importancia es que la organización nacional en Chile, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, es un proceso temprano y de rápida consolidación. En efecto, en 1830 se clausura un período muy breve de anarquía y se construye la hegemonía política de los sectores agrario-comerciales. Cabe observar que la formación del Estado nacional reconoce allí, como en los demás países de América Latina, la ruptura del orden colonial y la emergencia de un nuevo sistema de dominación internacional. Por eso mismo, también el Estado chileno que nace de la independencia sólo satisface parcialmente los rasgos que la experiencia europea confiere a esta nación. El Estado que se forma es un Estado nacional en el sentido de instrumento de la unificación política territorialmente basada, y de impulsor de la economía de exportación. Como en los demás países de América Latina, el Estado nacional chileno es un Estado oligárquico, que restringe la participación política a las clases económicamente predominantes y a los sectores sociales a ellas asimilables. La exclusión de las clases dominadas limita su legitimidad a una "elite". La identidad que se logra no es abierta y consensual, como en el caso de los Estados nacionales europeos.

Si se adopta un enfoque comparativo en el contexto de América Latina, la originalidad de la sociedad chilena aparece con claridad. El Estado oligárquico que surge con Diego Portales se apoyó sobre la temprana unificación de los sectores agrarios y comerciales. Pero el carácter unificado de la clase dirigente respondía al hecho de que allí las luchas por la independencia dejaron intacta la pauta económica colonial.² El Estado portaliano, nacido de la victoria de los terratenientes conservadores sobre los liberales, fue el encargado de organizar la sociedad, y lo hizo con éxito. La guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana (1836) vino a legitimar su eficacia. Un país homogéneo, sin el peso de una sociedad indígena comparable a la de Bolivia o Perú, y en el que las fuerzas centrífugas eran más débiles, pudo instaurar un orden oligárquico estable que puso fin a la anarquía e impulsó la modernización capitalista de la clase dirigente.

Esta temprana formación de un Estado nacional —un Estado que, insistimos, participa de los efectos que introduce en su constitución la inserción dependiente en el sistema capitalista mundial— se construye, a nuestro juicio, en una dimensión clave para el análisis de la forma que reviste la dominación política en el momento de la formación del enclave salitre-ro. Veamos por qué.

ECONOMÍA DE ENCLAVE Y PATRÓN DE DOMINACIÓN POLÍTICA EN LA SOCIEDAD CHILENA: LA SINGULARIDAD DEL “MODELO POLÍTICO” CHILENO

Desde fines del siglo XIX, el desarrollo del capitalismo dependiente giró en Chile en torno al enclave. Como lo señalan Cardoso y Faletto,³ esta forma de articulación con el exterior produce sobre el sistema de dominación interno de la sociedad dependiente efectos que difieren de aquellos que se generan sobre las estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad con control nacional del proceso productivo. *Nuestra hipótesis es que, si bien la modalidad de dependencia constituye un factor clave en el análisis de los sistemas de dominación de las sociedades dependientes, no lo agota. Se hace necesario incluir el estudio de los procesos de formación de las sociedades nacionales como la otra dimensión analítica a controlar.* Los efectos producidos por las diferencias en los procesos de constitución de las sociedades nacionales, después de la ruptura del pacto colonial, han sido mucho menos sistemáticamente estudiados que los que genera la forma básica de dependencia con el exterior. Pese a que en este estudio no nos proponemos abordar el análisis de las diversas formas que revistió ese proceso en las sociedades latinoamericanas (las comparaciones que aquí se hacen aparecen más como contrapunto para esclarecer el tema en discusión que como resultado de un análisis sistemático de ese período) lo que nos interesa destacar, es que las peculiaridades que ese proceso reviste son de especial importancia para comprender las estructuras políticas que se generan en las sociedades dependientes. La pregunta central que

cabe formularse es por qué la sociedad chilena, sociedad de enclave, conoció un modelo político atípico con respecto a otras situaciones de dependencia de enclave. Más aún, por qué ese modelo político resulta un caso "raro" y no encuadrable en las tendencias más generales que resultan de la tipología de formas de dependencia estudiadas por Cardoso y Faletto.

Para responder a estas interrogantes es necesario hacer jugar las dos dimensiones señaladas. Los efectos que produce la forma de dependencia con el exterior se interiorizan en la sociedad dominada *mediatizados por* la forma específica de articulación de las relaciones sociales, económicas y políticas que ésta presenta. De este modo, las diferentes reacciones de los grupos locales al sistema que supone el enclave deberán ser sistemáticamente puestas en relación con las peculiaridades de los procesos de formación de las sociedades nacionales. Aunque ésta no sea nuestra pretensión, pues desborda en mucho los objetivos de este trabajo, el análisis del caso chileno puede ofrecer algunas pistas —al menos razonando por contraste— para esclarecer la importancia de esta dimensión en el análisis del sistema de dominación dependiente.

Retomemos nuestra pregunta inicial: ¿en qué consiste la atipicidad del modelo político chileno que se construye como respuesta al sistema del enclave? En primer lugar, en Chile, un Estado nacional precede a la constitución del enclave. Con esta afirmación queremos señalar la peculiaridad que representa la temprana unificación de los sectores agrario-comerciales y su expresión a través de un Estado que realiza su dominación de clase garantizando el orden social, la propiedad privada de la tierra y la exportación de las materias primas.

Este Estado autocrático, construido con Portales, fue ampliando progresivamente las bases sociales de su dominación oligárquica. De ser la expresión inicial de los intereses económicamente dominantes —los grandes terratenientes del valle central— pasó a constituirse en el representante de una clase dirigente más diversificada, que incluía a sectores de una burguesía industrializante nacida en torno a la minería y, en menor grado, a la manufactura.⁴ La dependencia de las diferentes fracciones de la clase propietaria con respecto a la economía de exportación constituía el fundamento de su unificación política. Las transformaciones institucionales (la "República Liberal": 1869-91) pusieron de manifiesto que se estaba desarrollando un proceso de liberalización del régimen político que, sin embargo, coexistió con una pauta de comportamiento oligárquico. En efecto, la sociedad política de entonces sólo incluía a aquellos sectores de las clases propietarias cuyo poder económico les permitía abrirse un espacio político. Esta articulación entre el poder económico y el poder político, directamente expresada por el Estado, es lo que le confirió su carácter de Estado oligárquico a pesar de la presencia de formas democráticas. Los patrones de funcionamiento de ese Estado aparecían directamente ligados a los intereses de sus "propietarios".

Este modelo de funcionamiento del Estado no es original de la sociedad

chilena, sino que expresa la ambigüedad fundamental que caracterizó a los Estados latinoamericanos desde su formación. Sin embargo, este “dato” cobra decisiva importancia para poder explicar las reacciones de los grupos locales ante el sistema del enclave. La forma según la cual este Estado nacional —dentro de los límites que caben a esta expresión— se articuló con el enclave, constituye el nudo explicativo de las transformaciones ocurridas en el patrón de dominación política en la etapa del enclave, así como de la estabilidad política de ese patrón.

En un primer nivel de aproximación al problema, se puede afirmar que el Estado oligárquico se transforma como consecuencia de la constitución del enclave. El poder económico dominante queda fuera de la sociedad. La disociación entre el poder económico —la dominación extranjera sobre los recursos minerales— y el poder político de las clases dominantes locales, todas ellas económicamente débiles frente al enclave, alcanza su grado máximo bajo esta forma de dependencia. La oligarquía nativa pasa a depender del Estado como fuente principal de recursos. En ausencia de propietarios nacionales del sector exportador, es el Estado el encargado de negociar el excedente proveniente del enclave. Las clases propietarias locales participan de los beneficios en el marco de la dominación extranjera y en condición de subordinación frente al Estado, intermediario de su articulación con el enclave. La economía de enclave redefine las funciones del Estado: su nuevo patrón de funcionamiento se expresa en una mayor exteriorización con respecto a su dominación de clase. *El Estado pasa a ser el lugar de negociación de los recursos del enclave.*

¿Cuál es la peculiaridad del proceso de constitución del enclave en la sociedad chilena? En Chile, a diferencia de las demás situaciones de enclave latinoamericanas, esta mayor exteriorización del Estado con respecto a su dominación de clase no aparejó como consecuencia la inestabilidad política crónica. Cabe preguntarse por qué la dinámica política de la sociedad chilena se apartó de las formas más comunes que ésta revistió en las sociedades de enclave. En efecto, en éstas la inestabilidad política fue la consecuencia de las pugnas entre las distintas fracciones de la clase dominante por controlar la principal fuente de recursos, el Estado (o su proyecto). *Nuestra hipótesis es que la estabilidad política en Chile está asociada a la existencia de un Estado que expresó la unificación de los sectores de las clases dominantes locales.* Esta unidad de las clases dominantes locales constituye un rasgo decisivo para entender cómo éstas reaccionaron frente al sistema del enclave.

La legitimidad del Estado no fue cuestionada. Por el contrario, las clases dominantes locales se sirvieron de ella para negociar —desde una posición de subordinación y repliegue frente al enclave— sus posiciones políticas y económicas. La burguesía industrializante aprovechó las posibilidades de desarrollo de los sectores mercantiles y financieros, y los te-

rratamientos se beneficiaron de la colocación en el mercado interno generado por el enclave.

Desde el punto de vista de los efectos generados por la constitución del enclave sobre las clases dominadas, cabe señalar que la explotación del salitre chileno, como la del estaño boliviano, significó el uso extensivo de mano de obra. Esto, unido a las características del trabajo, dio lugar a la formación de concentraciones típicamente proletarias, de las que habrían de surgir las primeras organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera. Paralelamente al crecimiento de la protesta minera, la función represiva del Estado se acentuó. Las clases dominantes locales pasaron a depender cada vez más de la protección del Estado frente a los desafíos internos resultantes de la movilización obrera. Al impugnar el esquema de dominación imperialista, la protesta minera se constituía en una amenaza al sistema de dominación subordinada de la sociedad chilena.

El efecto principal que la constitución del enclave produjo sobre la forma del Estado, fue como señaláramos, su mayor exteriorización con respecto a la dominación de clase. Este Estado administrador de los recursos del enclave, encargado de otorgar privilegios y concesiones nacionales y extranjeras, fuente del crédito interno y externo (y, por eso mismo, lugar de negociación con el imperialismo), generó una amplia capa funcionaria.⁵ Nacida a su sombra, una pequeña burguesía profesional y burocrática creció alimentada por los recursos estatales provenientes del enclave. De este modo, el Estado creaba su propia base social de apoyo. Estos sectores del funcionariado se constituyeron en los garantes ideológicos de la reproducción de ese Estado.

La contrapartida de la mayor exteriorización del Estado del enclave con respecto a su dominación de clase —consecuencia de la dominación bajo la forma del enclave y de la desarticulación resultante entre el poder económico y el poder político en el seno de la sociedad chilena— fue su apertura a otras fuerzas sociales. El Estado autocrático se “abrió”, y esa apertura legitimó a nuevos actores. Pero, por su carácter de lugar de negociación con el imperialismo —y por lo tanto, lugar de compromiso entre las distintas fuerzas sociales— éstas se definieron en términos de una lucha política por su inclusión en el Estado y no a través del cuestionamiento de la forma de dominación que éste representaba. La lucha política era una lucha por la participación en los beneficios antes que una lucha por el control del aparato estatal mismo. En efecto, la presión ejercida por los sectores medios —que se expresó en la escena política a través del Partido Radical y del Partido Demócrata— sólo pugnó por la democratización formal de las estructuras de poder.

La crisis política de 1891, que culminó con la caída de Balmaceda, puso de manifiesto el doble impacto de la crisis económica que afectaba a Chile y la agudización de la protesta minera. La solución política (la “República Parlamentaria” que se inauguró entonces) tradujo el debilitamiento del Estado como lugar de negociación y garante del “reporte

democrático" entre las clases dominantes locales y los sectores de la pequeña burguesía. Un Estado constitutivamente débil, puesto que el poder económico dominante estaba afuera de la sociedad, se debilitaba aún más frente a los avatares económicos del enclave.

Pero este debilitamiento del Estado, consecuencia de la contracción económica y del descontento minero, no se tradujo en la ruptura del modelo político de funcionamiento instaurado con el enclave. La crisis se resolvió a través de una mayor autonomía del sistema institucional. El sistema político pasó a ser el lugar del compromiso entre las fuerzas sociales. El proyecto estatista de Balmaceda, que fue un proyecto de integración nacional contra el imperialismo y de reivindicación de los intereses de los trabajadores, fracasó. La burguesía chilena no estuvo dispuesta a sostenerlo. Beneficiaria de un esquema de dominación extranjera, se limitó a defenderlo. Desde la constitución misma del enclave, y aun antes, los sectores de la burguesía industrializante no se expresaron políticamente como una "burguesía nacional". Sus intereses estaban estructuralmente articulados a los del capital imperialista.

Desde entonces, las instituciones políticas de la democracia parlamentaria pasaron a ser el lugar de resolución eficaz de los conflictos sociales. La pregunta que cabe formularse es cuáles fueron los factores que hicieron posible que esta solución política alcanzara estabilidad. Para responderla, es necesario volver la mirada hacia la forma que revistió la lucha de clases en esta sociedad de enclave.

El movimiento obrero chileno venía gravitando desde muy temprano como fuerza social autónoma.⁶ Su composición predominantemente minera le confería características específicas. Aunque no desarrollaremos aquí las implicaciones de esta afirmación, importa señalar que su fuerza venía del enclave, dato que nos parece de importancia decisiva. La forma fundamental que revistió la lucha de clases en Chile fue la del enfrentamiento entre los obreros del enclave —el sector económico estratégico— y las clases dominantes locales. El campo de la oposición principal quedaba definido por las demandas obreras dirigidas hacia el enclave. La permeabilidad del sistema institucional para absorberlas, así como la capacidad de institucionalización del conflicto que de ella derivaba, no pueden ser desvinculadas de esta situación básica. El enfrentamiento revestía la forma de un enfrentamiento minero (salitre, cobre, carbón). Sin embargo, sus personajes claves eran el proletariado del enclave y el poder económico extranjero. La apertura del sistema político a las representaciones obreras definía una lucha institucional cuya característica central era que esta oposición entre partidos reproducía la oposición entre las clases. Esta peculiaridad chilena la acercó a la experiencia europea. Sin embargo, el hecho de que los partidos obreros se definieran como agentes políticos de la clase obrera no significó, en los hechos, que su acción no se sometiera a las formas que le imponía el sistema de dominación de la clase dirigente. Como observa Petras: "Los partidos obreros fueron

cooptados, en diferentes escalas, con el resultado de que la izquierda adquirió el estilo político de la clase media".⁷ Y esta forma de dominación no puede ser comprendida si se la desvincula del carácter dependiente de la sociedad chilena.

El modelo político chileno se caracterizó por abrirse a las clases dominadas, pero sobre la base de un pacto implícito acerca de quiénes, dentro de éstas, serían legitimados. Si bien los partidos obreros se constituyeron en agentes políticos de la clase, en los hechos su acción estuvo dirigida a satisfacer —dentro de los límites de lo negociable— las demandas de los sectores estratégicos de la economía, que son los que, lógicamente, disponían de mayor poder de regateo. Los protagonistas del patrón de dominación política —los actores legítimos— eran la burguesía (y los terratenientes, estrechamente vinculados a grupos urbanos, financieros, comerciales y minero-industriales), las capas medias y los sindicatos (a través de los partidos obreros). Los campesinos, excluidos de la sociedad política, quedaban bajo el control de los terratenientes. Este aspecto también reviste importancia para comprender el *plus* de poder que éstos conservaron en el bloque dominante.

Este compromiso social tácito es, a nuestro juicio, la clave para entender la continuidad institucional de la sociedad chilena y su coexistencia con una fuerte discontinuidad social. El fundamento de su estructura fue la dominación de enclave. Su peculiaridad, el hecho de que la presencia delegada de los trabajadores en el sistema político no revistiera formas populistas. Pero también, y decisivamente, el hecho de que la lucha de clase apareciera en su forma más pura de enfrentamiento en los marcos de una economía nacional antes que como una lucha anti-imperialista. En efecto, el modo de dominación fundamental quedaba encubierto: esto hizo posible que la lucha de clases se negociara dentro de los marcos de la institucionalidad.

Las raíces de la singularidad del modelo político paulatinamente derivado de la transformación del Estado autocrático portaliano, descansan en la unificación de las clases dominantes locales, todas ellas dependientes de la dominación extranjera. Este es el fundamento del modo particular de solución política con que respondieron al sistema del enclave. La contrapartida de esta unificación temprana de la clase dominante la constituye el génesis de un movimiento obrero de composición minera que se expresó a través de un espacio sindical y político autónomo. Este movimiento expresaba la heterogeneidad estructural de la clase obrera, fruto de la desarticulación creada por el sistema de enclave. La legitimidad de la batalla corporativa librada por los partidos obreros en los marcos del sistema político tenía como restricción la exclusión de las demandas del resto de las masas trabajadoras.

En las situaciones de fraccionamiento de las clases dominantes locales, no se pudo constituir un movimiento que alcanzara expresión política autónoma. Pero —y esto marca la consecuencia diferencial más impor-

tante— tampoco el sistema político fue capaz de constituirse en el lugar eficaz de resolución de conflictos de clase. La menor capacidad de integración de las clases dominantes y la inestabilidad política consecuente condujeron a situaciones de crisis política permanente, o bien a la ruptura violenta del sistema, como en Bolivia o México. Es interesante observar aquí, a manera de contrapunto, el caso colombiano. En efecto, en este país, después de la crisis mundial de 1929, la unificación de los diferentes sectores de la clase dominante constituyó un factor clave para lograr la estabilidad política. Sin embargo, esta unificación tardía (tardía si se piensa en Chile) tuvo un efecto más débil que en el caso chileno. Allí, la lucha política revistió formas populistas. La clase obrera se definió como liberal o conservadora y el Partido Comunista tuvo escasa significación. La violencia como instrumento de impugnación de la dominación, fue un elemento constante en la vida política colombiana.

Si bien no es nuestra pretensión desarrollar sistemáticamente las implicaciones que derivan de las similitudes y diferencias entre estas dos sociedades, importa destacar que la estabilidad política aparece asociada a la unificación de las clases dominantes.⁸ El caso de Uruguay ofrecería otro ejemplo de refuerzo, con la salvedad de que allí la estabilidad política no estuvo asociada a la fuerte impugnación —la violencia— como en Colombia: el movimiento obrero uruguayo se articuló tempranamente desde el Estado (el Estado batllista), y estuvo marcado en su acción por formas populistas).⁹

En síntesis, nuestra interpretación afirma que, si bien el modelo político chileno se acerca a la experiencia europea, confundirlo con ella conduce al error de no captar sus rasgos distintivos esenciales. En otras palabras, *este modelo político no puede ser comprendido si se lo desvincula de los efectos que produjo en la sociedad chilena la dependencia bajo la forma del enclave*. Con la salvedad, ya señalada, de que no se trata de reducir la explicación a una causalidad externa que opere como principio y fin del análisis: los efectos que produjo la dependencia de enclave se articularon al sistema de relaciones sociales, políticas y económicas que derivaban de la especificidad del proceso de creación de la sociedad nacional en Chile.

Desde el punto de vista de las clases dominadas, los actores legítimos del modelo fueron los sindicatos (principalmente los sindicatos del enclave) y sus representaciones políticas (el Partido Comunista). La clase obrera tendió a definirse, a través de sus partidos, en términos de su participación en el Estado, y no por el cuestionamiento de éste en tanto agente de la opresión económica de otras clases. Su lucha política revistió un carácter defensivo, pese a que en lo ideológico-doctrinario el Estado era definido como agente de explotación de la clase.

La dominación de clase se ocultó bajo el ropaje de un “Estado por encima de la sociedad” y de un sistema político, abierto y flexible, lugar de negociación de los conflictos. Excluido el campesinado de la sociedad

política, y ausente también del discurso de los partidos obreros, la amenaza a este pacto social era débil.

Esta originalidad del modelo político, que los comentaristas frecuentemente caracterizaron como un sistema "avanzado" y próximo al caso europeo, sin más especificaciones, permite comprender la presencia simultánea de la continuidad institucional y de la discontinuidad social como rasgos básicos de la sociedad chilena. La dificultad que ofrece su caracterización se refleja en la ambigüedad que rodea a la definición del bloque de poder. En efecto, Faletto prefiere hablar, cuando se refiere al bloque de poder que se consolida con el sistema de enclave, de bloque "oligárquico-burgués".¹⁰ La necesidad de apelar a este "dúo" parece responder al hecho de que la dominación de clase revistió un carácter burgués —en tanto que abierta y consensual, lo que no significa que no se haya apelado a la violencia— pero sus "propietarios" no pueden ser confundidos con una burguesía en el sentido estricto del término. No se trata de una burguesía a nivel de las relaciones de producción. En este nivel, las clases dominantes se comportaron más bien como una oligarquía: estaban interesadas en la reproducción de sus privilegios, y por ende, del sistema de dominación imperialista, más que en la transformación de la sociedad.

La crisis política de 1924, marcada por la presencia de los militares en la escena política, se resolvió a través de la legitimación atomizada del movimiento obrero.¹¹ La democratización de las estructuras de poder coexistió con el reforzamiento de la desorganización política de las prácticas del proletariado. Por eso mismo, se mostró eficaz para sortear la crisis. Los militares actuaron como garantes del modelo político de funcionamiento de la sociedad, asegurando el tránsito hacia una nueva articulación de las relaciones sociales dentro de las restricciones que imponía el sistema institucional vigente. En 1927 fue un militar, el general Ibáñez, el encargado de enfrentar la crisis económica. Preservar las bases del sistema económico dependiente suponía, y así lo entendió Ibáñez, la apertura masiva hacia los capitales norteamericanos.

EL ESTANCAMIENTO DEL MODELO: DE LA CRISIS MUNDIAL AL GOBIERNO DE FREI

La crisis mundial de 1929 no dejó de tener efectos sobre el modelo político descrito. Sin embargo, y a diferencia de las situaciones latinoamericanas más comunes, en Chile no se produjo una ruptura del sistema político. En efecto, mientras que la crisis mundial en la mayoría de los países latinoamericanos se tradujo en la crisis de la dominación oligárquica y, con ella, en situaciones de crisis política permanente, en Chile la dinámica social siguió un camino diferente.

La crisis política de 1932 —la instauración de la "República Socialista" de los 13 días— no rompió con las líneas fundamentales del modelo polí-

tico vigente hasta entonces. La consigna del movimiento socialista de entonces, prohijado por sectores del ejército, era: "Pan, techo y abrigo". Una consigna defensiva que continuaba definiendo la lucha política como una lucha por tomar parte en un sistema, antes que como una lucha contra las bases mismas de ese sistema de dominación. El dato más significativo que apoya esta afirmación es que este movimiento no haya propuesto ninguna reforma al sistema de tenencia de la tierra.

El Partido Socialista, creado en 1933 (y entre cuyos fundadores se encontraba el general Grove, protagonista de la República Socialista), se hacía eco de aquellos sectores sociales caracterizados por su marginación de la estructura productiva. Fundamentalmente, de los sectores del semi y subproletariado urbano cuya inserción en el proceso productivo era marginal e inestable, y de sectores de la pequeña burguesía urbana radicalizada frente a la crisis (pero también, de aquellos sectores obreros que la crisis había dejado fuera del sistema productivo). La heterogeneidad de su composición de clase —principalmente urbana— determinó el aspecto decisivo de las formas que revestiría su acción política. Desde sus inicios, en efecto, expresó un populismo revolucionario articulado a la protesta por la exclusión de la sociedad política, pero a pesar de constituir una amenaza para el modelo político, no transgredió sus límites de tolerancia. En lo fundamental, este hecho se explica porque los sectores rurales —el campesinado— también estaban ausentes de su discurso político.

De este modo, la legitimidad del Estado no fue cuestionada en los hechos. La oposición de los partidos políticos, pese a expresar clivajes de clase, se continuó librando en el seno de las instituciones políticas.

Esta descripción, sin embargo, es insuficiente para captar las modificaciones producidas por el impacto de la crisis mundial sobre la sociedad chilena. En el plano económico, la crisis desembocó en el impulso de una serie de medidas tendientes a promover un proceso de industrialización sustitutiva. Esta respuesta no fue novedosa: como en el resto de América Latina, la crisis impuso un reordenamiento de las relaciones con el exterior. Las devaluaciones permitieron "socializar las pérdidas" como lo muestra Celso Furtado, y los sectores agrarios sólo se vieron afectados de manera indirecta. Es en el plano político donde aparece la especificidad de la solución chilena a la crisis mundial.

Las fracciones de la clase dominante sufrieron no sólo el impacto económico de la crisis, sino también, e inevitablemente asociado a éste, el impacto político. La "República Socialista" constituyó el primer desafío al modelo político y al pacto social que éste suponía. La gestación del Frente Popular y su acceso al gobierno representó el segundo y más importante legado de la crisis mundial en el plano de la política. La unificación de los sectores de la pequeña burguesía profesional y burocrática en torno al Partido Radical tenía ya una larga trayectoria. Las imbricaciones de estos sectores con la clase dominante, específicamente con sectores terratenientes, también. El Frente Popular se constituyó como

coalición del Partido Radical y de los Partidos de izquierda: el Partido Comunista y el Partido Socialista, las dos representaciones fundamentales de la clase trabajadora. Sus integrantes levantaron la bandera del desarrollo industrial, y con ella el proyecto de desarrollo de la sociedad que compartía la burguesía chilena.

El acceso al gobierno del Frente Popular puso de manifiesto la pérdida que en el plano político sufrían las clases dominantes chilenas. En efecto, éstas fueron incapaces de retener en sus manos el aparato político. Sin embargo, conservaron su hegemonía política de manera indirecta y —lo que marca su especificidad— sin quebrar la continuidad institucional. Veamos por qué.

Las ideas del Frente Popular eran tributarias de las clases dominantes a las que la crisis mundial había afectado en el plano político bajo la forma de una crisis de representación. El Partido Conservador ya no representaba la unificación de sus intereses de clase, redefinidos por la crisis de la forma de articulación en el sistema capitalista mundial. En efecto, el proyecto conservador defendía la reproducción de los privilegios de una oligarquía beneficiaria de la dominación imperialista, pero sin proponer las vías para que esa reproducción fuese viable en los marcos de la nueva situación estructural. Proyecto alimentado del pasado, no tenía respuestas para el presente. La respuesta surgió de la alianza entre las clases medias y las clases populares, alianza que se constituyó en la fuerza social capaz de expresar en el plano político la alternativa a la crisis. Esta alianza incluía, como señalamos, a los sectores medios, “hijos” del Estado creado por la clase dominante y depositarios de la ilusión de un Estado asistencialista, ámbito común de participación para todas las clases sociales.

El proyecto del Frente Popular postulaba el desarrollo de un proceso de industrialización simultáneo con un proceso de redistribución de la riqueza social. Este aspecto constituyó el nudo de la contradicción principal que se desarrolló en la política del frente popular desarrollista. La oposición “más salarios o más acumulación” definía dos orientaciones que se mostraron irreconciliables. En efecto, pese a que las masas rurales quedaban excluidas de los beneficios del pacto desarrollista, esta condición no fue suficiente para impedir que se agudizara la lucha social por la apropiación del producto. Los altos niveles de inflación dejaron prácticamente inalterada la distribución del ingreso.¹² El impulso hacia una rápida acumulación, en el que el Estado jugó un papel clave, no se tradujo en políticas redistributivas. Sin embargo, aumentó en números absolutos la fuerza de trabajo incorporada al sistema productivo.

Estas condiciones de funcionamiento del frente popular alteraron la composición de la alianza que lo constituía. La ruptura de la coalición política y el alejamiento de los partidos de izquierda fue la contrapartida de la contradicción en que se debatió la política estatista-desarrollista del frente. En 1948, bajo el gobierno radical de González Videla, se pro-

mulgó la "Ley Maldita". Con esta ley quedaba sellado el fraccionamiento de la alianza que expresó el Frente Popular. El desarrollo del modelo se tornó incompatible con la presencia obrera.

La burguesía chilena —los sectores ligados a la economía urbano-industrial— enfrentada a las condiciones que favorecían una política desarrollista, optó por una política de retraimiento. El Estado asumió un papel omnipresente en la economía a través de la creación de obras de infraestructura y del manejo del crédito. Sin embargo, la burguesía —estructuralmente débil, como consecuencia del sistema de enclave— sólo respondió con un comportamiento gerencial y especulativo. Por otra parte, los sectores industriales cedieron ante el carácter intocable de la estructura agraria. La resistencia a toda forma de tributación o transferencia de ingresos desde los sectores agrarios, hacía inviable la política del frente desarrollista. En efecto, la transacción "bajos precios agrícolas, apoyo estatal" se estabilizó durante los gobiernos radicales del Frente Popular.¹³ Los distintos mecanismos de compensación para el sector agrario estuvieron destinados a contar con el apoyo del "sector tradicional". Esto se explica si se tiene en cuenta la vigencia de caracteres patrimonialistas en el capitalismo agrario chileno, lo que convertía a los terratenientes en aliados eficaces para asegurar el control político sobre el mundo rural.

El fracaso de la política del frente popular desarrollista tuvo como corolario inmediato la desarticulación de las prácticas políticas del movimiento obrero. La experiencia ibañista que le sucedió puso de manifiesto este efecto sobre las clases dominadas. Este intento de rearticulación populista de las relaciones entre las clases populares y el Estado, aunque fracasado, traducía el desgaste de una lucha política que, en razón de librarse a través de partidos que correspondían a las líneas demarcatorias de clase en la sociedad chilena, ya no se mostraba eficaz para resolver los conflictos sociales en el seno de la institucionalidad vigente.

Desde el punto de vista de los sectores de la burguesía industrial, el ibañismo significó la apertura a capitales extranjeros, específicamente al capital norteamericano, propiciando una nueva alianza cuyo fracaso no puede ser desvinculado de la crisis económica que sacudía a Chile en 1953. La experiencia ibañista dejaba al desnudo las oposiciones de clase en la sociedad chilena. La exterioridad del Estado con respecto a su dominación de clase, que el ibañismo había tratado de reforzar, se debilitó. Con ese debilitamiento, peligraba la eficacia que el sistema político había mostrado como lugar de negociación de la lucha social. La formación del Frente de Acción Popular, a comienzos de 1956, reflejó ese proceso. Sin embargo, su ideología seguía siendo tributaria del modelo político burgués impulsado por el Frente Popular. La oposición partidaria volvía a reproducir con nitidez las líneas demarcatorias de las clases en la escena política, pero no impugnaba las bases del modelo político de funcionamiento de la sociedad. La burguesía salió fortalecida de la etapa ibañista, como observa Faletto.¹⁴ En 1958, el triunfo electoral de la alian-

za conservadora-liberal, por un estrecho margen de votos sobre el FRAP, abrió las puertas a un proceso de profundización capitalista dependiente (ya iniciado por Ibáñez) bajo la égida del capital extranjero. Este proceso redefinió a niveles más agudos la lucha social y política.

La fórmula de poder que llevó a Jorge Alessandri a la presidencia implicaba, en el plano político, el avance del capital monopolista sobre las demás fracciones de la burguesía. El objetivo era una política de desarrollo que facilitase las inversiones extranjeras y que marginase a los sectores populares del sistema de decisiones, como condición básica para acelerar la formación interna de capitales y asegurar su control a través de unidades monopolistas, básicamente extranjeras. La ambigüedad de este proyecto residió en el intento de seguir manteniendo unificado al conjunto de la burguesía, incluidos los sectores agrarios tradicionales. En efecto, se continuó transfiriendo ingresos hacia los sectores agrarios y se dejó intocado el régimen de tenencia de la tierra.¹⁵ Esta contradicción básica marcó el fracaso del intento de compromiso entre las fracciones dominantes locales y el capital extranjero. La etapa alessandrista inició un proceso generalizado de desnacionalización de la economía chilena que, por las razones expuestas, no desembocó en una articulación estable de las nuevas relaciones sociales, económicas y políticas favorecidas por la redefinición de la situación de dependencia en el sistema capitalista mundial.

El Estado se debilitó en su capacidad de gestionar los intereses en pugna, viéndose cada vez más sometido a los avatares económicos y más dependiente de aliados y adversarios. Los niveles cada vez más agudos de tensión social se expresaron bajo la forma de una movilización popular en torno a consignas socializantes que ponían de manifiesto el fracaso de la alternativa conservadora para redefinir la dependencia y generar las condiciones políticas que exigía el nuevo modelo de acumulación.

LA RUPTURA DEL MODELO: EL GOBIERNO DEMÓCRATA-CRISTIANO

El acceso de la Democracia Cristiana al gobierno, en 1964, se inscribió en los marcos de la crisis política del período alessandrista. La Democracia Cristiana significaba, desde su aparición en la escena política, un cambio cualitativo en las prácticas políticas de las clases dominantes chilenas. Hasta entonces, las iniciativas de transformación de la sociedad habían sido formuladas como iniciativas de las clases dominadas, pese a que se tratara de ideas tributarias de la burguesía. Con la Democracia Cristiana, la iniciativa surgía directamente, como observa Faletto,¹⁶ del seno de la propia burguesía.

El proyecto de la DC coincidió con los años de la Revolución cubana, el intento de respuesta de la Alianza para el Progreso, y los cambios producidos en el sistema capitalista mundial, en el que las empresas multinacionales comenzaron a cobrar un papel más gravitante y expansivo.

En el plano económico, la DC intentaba dar respuesta a la crisis a través de la creación de las bases para un proyecto neocapitalista de reordenamiento de las formas de acumulación conforme a las condiciones vigentes a escala internacional. La reforma agraria y la chilenuzación del cobre fueron los dos pilares de esta estrategia destinada a crear las condiciones para un modelo de desarrollo "asociado".¹⁷

En el plano político, la "Revolución en Libertad" implicaba la redefinición del aparato estatal mismo. Una autoridad presidencial fuerte y la presencia de una tecnocracia integrada en la cúspide por gerentes del capital, debían concentrar el poder como vía para fijar la dirección de las transformaciones promovidas: o sea garantizar las condiciones de acumulación y la "paz social".

La reordenación de los mecanismos de acumulación implicaba, sin duda, una transformación de las estructuras políticas vigentes hasta entonces. Un Estado débil como lugar de dirección política y económica del conjunto de la sociedad, que aparecía a través de un sistema político flexible y relativamente abierto, debía ser "puesto en forma". Se trataba de consolidar un Estado más fuerte, no sólo en el sentido obvio de un Estado más represivo, sino —y sobre todo— en tanto empresario de las transformaciones buscadas. Para ello, se imponía abandonar las formas asistencialistas que habían caracterizado al modelo político de funcionamiento de la sociedad chilena. Pero este proyecto requería de una alianza que hiciera factible "limpiar" del mercado a los "ineficientes".

La base social de apoyo de la DC se fundó en una alianza con amplios sectores de las clases dominadas. En lo fundamental, se trataba de los excluidos de la sociedad política: el campesinado pobre y los sectores urbanos marginales.⁹⁸ La profundización y modernización del capitalismo dependiente iban de la mano del reformismo de corte populista.

Esta contradicción básica entre modernización capitalista y solución política populista —a través de la manipulación ideológica de amplios sectores populares— selló el dilema con que se enfrentó la DC en sus seis años de gobierno. El análisis de la situación política en ese período es esclarecedor al respecto. La movilización política de sectores del campesinado (Reforma Agraria, sindicalización campesina), y de sectores del semi y subproletariado urbano, rebasó los límites tácitos de la alianza impulsada por la DC. Así, el gran compromiso social que promovió la DC se vio condenado por todas las fuerzas sociales que lo componían. Condenado por la derecha y por las clases medias, que se aterrorizaron ante la presión popular creciente y que no estaban dispuestas a pagar el costo del proceso inflacionario; por los grandes propietarios, para quienes la Reforma Agraria había significado un duro golpe y la movilización del campesinado amenazaba con su liquidación definitiva; por la burguesía industrial, que continuó comportándose parasitariamente con relación al Estado y se mostró temerosa ante la presión popular acrecentada. Y

condenado también por las masas populares —urbanas y rurales— cuyas expectativas quedaron frustradas.

El hecho decisivo para comprender el fracaso de la DC reside precisamente en que ésta rompió con el modelo político en que venía funcionando la sociedad chilena desde comienzos de siglo.

Nuestra hipótesis es que los efectos de la crisis mundial sobre ese modelo político no quebraron la continuidad institucional porque el pacto social en que éste se asentaba se mostró eficaz para resolver los conflictos de clase fundamentales en la sociedad chilena. La DC rompió los límites de ese compromiso social tácito, y con ellos selló la ruptura del modelo político que había hecho de la sociedad chilena un caso excepcional en el contexto latinoamericano.

El talón de Aquiles de la DC lo constituía su costado populista. En efecto, su proyecto económico exigía la represión de los sectores populares y el precio de ésta —a la que no dejó de echar mano— fue la pérdida de su base social entre las clases dominadas. Este hecho se tradujo también en la pérdida de su legitimidad en el seno mismo de la formación partidaria.¹⁹

Por otra parte, el modelo de desarrollo (asociado al capital extranjero) que la DC impulsaba no fue capaz de garantizar la inversión reproductiva por parte de la burguesía industrial. En efecto, ésta no se hizo eco de esas exigencias. El hecho de que éste fuera su comportamiento no puede ser desvinculado de su definición generencial y parasitaria frente al Estado, presente desde el período del frente popular desarrollista.

Roto el compromiso social sobre el que se fundaba la estabilidad del modelo político chileno, y sin poderse sentar las bases de una nueva fórmula social, la crisis en que se debatía la sociedad chilena desembocó en la fragmentación política de las clases dominantes.

El corolario del fracaso del proyecto demócratacristiano fue la crisis de la hegemonía política burguesa en el contexto de la creciente organización política del proletariado. En la brecha abierta por esa crisis se inscribió el triunfo electoral de la Unidad Popular.

LOS TRES AÑOS DEL GOBIERNO POPULAR: ENTRE LA CRISIS Y LA REVOLUCIÓN. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA SU ANÁLISIS

Los tres años de la Unidad Popular en el gobierno están marcados por una doble historia: la historia de la ruptura del modelo de funcionamiento político de la sociedad chilena y la historia del proyecto de transformación cobra importancia decisiva en la evaluación del proceso abierto por la Unidad Popular. En efecto, *nuestra hipótesis es que el proyecto de transición "democrática, libertaria y pluralista" hacia el socialismo no se hizo cargo de la ruptura del modelo político chileno; por el contrario, presupuso la continuidad de ese modelo.*

Esta hipótesis permite no encerrar la discusión dentro de los límites fijados por el análisis de las políticas de transformación de los distintos partidos de la izquierda chilena. En otras palabras, de lo que se trata es de superar los términos del dilema que enfrentó la Unidad Popular: la discusión acerca de las tácticas alternativas “avanzar sin transar” o “consolidar para avanzar”.

La dificultad principal que enfrentó el proyecto de transición al socialismo en Chile fue la de incorporar el análisis económico (“la batalla de la producción”) al análisis político. En efecto, ¿cuáles eran las implicaciones de su programa de reactivación de la economía, destinado a lograr el bienestar de las clases populares y fundado en el inicio de un proceso de transformación de las relaciones de propiedad? La UP se proponía mostrar que la revolución significa mejoras materiales inmediatas y no sólo futuras. Esta era su premisa para lograr una amplia base social de apoyo y reconstituir un compromiso social que permitiera la supervivencia y consolidación del proceso de transformaciones dentro del marco de la institucionalidad.

La secuencia de cambios prevista por el Programa de Gobierno (transformación de las estructuras productivas, reformas democráticas, movilización de las masas, nueva constitución política del Estado) suponía la resistencia y flexibilidad del sistema político para absorber las transformaciones realizadas.²⁰

Este aspecto constituye el nudo gordiano de la estrategia política de transformaciones planteada por la Unidad Popular. Podría resumirse diciendo que *la UP concibió al sistema político como lugar de resolución eficaz de los conflictos de clase*. De allí la preeminencia acordada a la lucha político-institucional como fuente de legitimación de su política. Pero este análisis político, fundamento de su estrategia, descansaba sobre una ilusión de larga trayectoria en la sociedad chilena: *la de que el Estado es el ámbito común de participación de las clases sociales* (lo que no implica sostener que su aspecto de dominación de clase haya sido ignorado).

Lo que importa destacar es que el aspecto de dominación de clase del Estado había aparecido ideológicamente transmutado bajo la forma de “un Estado por encima de la sociedad”. Sin embargo, las condiciones que hicieron posible esa percepción del Estado —el compromiso social tácito en que se afirmó la estabilidad del modelo político chileno— habían sido quebradas bajo el impacto del gobierno de Frei. La persistencia de esta concepción ideológica de la política es lo que explica el hecho de que el tema mismo del Estado estuviera ausente.²¹ ¿En qué sentido se afirma, a nuestro juicio, esta ausencia del Estado en la óptica de la UP? La UP se planteaba la necesidad de transformar el carácter burgués del Estado a través de su ocupación progresiva y contando para ello con el aparato de gobierno. El supuesto que fundamentaba esta concepción era que el gobierno ocupaba una posición clave en el seno del aparato estatal. Esta estrategia consideraba al Estado como lugar de dominación

de clase y simultáneamente como lugar en que la lucha de clases puede ser librada con éxito, si se tiene el gobierno. De este modo, el Estado era percibido bajo la forma fundamental que su funcionamiento había revestido en la sociedad chilena. Lo que la UP no pudo “ver” —y esta es la ausencia a que nos referimos— es al Estado como principio de unificación de la sociedad y de dirección de las transformaciones estructurales de la misma. En efecto, porque concibió al Estado como un conjunto de poderes cuyo control es necesario lograr para contar con el poder político total, no pudo concebirlo como una entidad distinta de los poderes que la integran, directriz de cada uno de éstos y, por lo tanto, instrumento clave para lograr el cambio estructural de la sociedad.

Porque la UP fue víctima de la ilusión del Estado como ámbito común a todas las clases sociales en su lucha por el poder, no pudo plantearse el problema del Estado como agente fundamental del cambio estructural de la sociedad. En otras palabras, no pudo formular una política económica que permitiera definir la dirección del proceso de cambio, y al hacerlo, delimitara el campo de los aliados y adversarios.

La UP no se hizo cargo de los efectos políticos que la puesta en marcha de su programa implicaría. De este modo, el problema central de la supervivencia y consolidación de las transformaciones alcanzadas como consecuencia de los puntos centrales de su programa económico de transición (nacionalización de las riquezas básicas, estatizaciones e intervenciones en los sectores de base y monopólicos, control estatal del sector financiero, erradicación del latifundio) quedaba oculto bajo la premisa de la flexibilidad del sistema político para absorber los cambios estructurales básicos. La lucha electoral legitimaría esas transformaciones y haría posible “ocupar” el Estado. Pero este mito de un Estado ocupable venía a llenar el vacío real: la ausencia de un proyecto alternativo de Estado, en el contexto de la crisis política de la hegemonía burguesa.

Durante la primera etapa de gobierno —el período de la denominada “política Vuskovic”, que llega hasta mediados de 1972— la UP desarrolló una política ofensiva de transformaciones estructurales que desembocó en un aumento generalizado de los niveles de bienestar de las clases populares y asestó un duro golpe a los sectores monopólicos de la burguesía y al latifundio. Las elecciones municipales de abril de 1971, en las que la UP aumentó significativamente su votación, dejaban sentir los efectos políticos de los cambios realizados en la estructura productiva.

A partir de entonces —el período de la denominada “política Millas”— se intentó dar respuesta a la crisis económica en que se debatía la sociedad chilena, enfrentada a una ofensiva cada vez más directa y frontal de la burguesía.

La política de la UP después del “Cónclave de Lo Curro” abrió una nueva fase en la forma de acción. Esta revistió un carácter defensivo y orientado hacia la búsqueda de una alianza con los sectores medios que

permitiera construir el compromiso social capaz de sostener las transformaciones promovidas. Esa política defensiva dejó librada la lucha de clases, en el campo y en la ciudad, a su propia dinámica. La consecuencia más visible de este proceso fue la desarticulación de las prácticas políticas del movimiento popular y su doble expresión a través de una acción espontaneísta que desbordó los límites de la política fijada por el gobierno (política defensiva de generación de alianzas) y una acción defensiva, destinada a asegurar las reivindicaciones económicas. En ambas formas de acción estaba ausente la consideración más general de los intereses del conjunto de las clases explotadas de la sociedad.

La política defensiva de la UP fue incapaz de articular orgánicamente al movimiento popular, y esto se tradujo en su debilitamiento como fuerza social para dirigir las transformaciones, a la vez que en el fortalecimiento de la acción contrarrevolucionaria de la burguesía.

Desde la perspectiva de las clases populares, la puesta en marcha del Programa de Gobierno se tradujo en la ruptura de los viejos controles estatales que habían pesado sobre ellas. La UP podía condenar las tomas de fábricas y de fundos, pero no podía reprimir a los trabajadores, puesto que se definía como su representante en el gobierno. Al mismo tiempo, sólo controlaba el aparato de gobierno —y era consciente de ello— lo que restringía sus posibilidades de aplicar una represión sistemática contra la acción contrarrevolucionaria de la burguesía y la pequeña burguesía (los “gremios”). En estas condiciones, el Estado quedaba diluido en la sociedad civil. El sistema político, desgarrado por la agudización de la lucha de clases, se mostraba incapaz de dar salidas políticas a la crisis. Gobernar ya no era sinónimo de negociar. El compromiso social que había hecho posible la eficacia de la negociación de los conflictos de clase, estaba quebrado.

Al limitarse a una política defensiva, la UP quedó prisionera de una estrategia a la que la realidad cotidiana se encargaba de castigar duramente. En los marcos de esta estrategia, el poder popular revistió un carácter defensivo. Sólo fue convocado en las coyunturas críticas: el paro patronal de octubre de 1972, el “tancazo” de junio de 1973. La concepción del proceso de toma de decisiones descansó en una “política en las alturas” cuya consecuencia fue la dependencia creciente con respecto al Ejército como árbitro político.

De este modo, la UP asistió, cada vez más impotente, al desarrollo de una crisis para la cual no tenía respuesta. En efecto, agotado el cumplimiento de las medidas económicas básicas propuestas en su Programa, se agotó también su capacidad de formular una política que consolidara las transformaciones estructurales logradas, al tiempo que fijara las líneas para avanzar en la construcción de la sociedad socialista.

En ausencia de una tal política (la UP improvisó un conjunto de medidas variables según la coyuntura, pero que no pueden ser calificadas como una política económica en sentido estricto), el proceso quedó a

la deriva, librado a la pura dinámica de la lucha de clases. La acción de la UP fue básicamente defensiva y por lo tanto vacilante. De este modo, el campo de sus enemigos pudo constituirse rápidamente mientras que el campo de sus aliados quedó desarticulado.

Esta paradoja del desarrollo de los tres años de gobierno popular no puede ser comprendida si no se toma en cuenta lo que calificamos como su doble historia: la historia de la crisis del modelo político chileno —de su desarticulación— y la historia de la estrategia de transición al socialismo, una vez en el gobierno.

Durante los tres años de la Unidad Popular, la sociedad civil terminó por arrasarse con el Estado. El golpe militar de septiembre arrasó con la sociedad.

- ¹ Véase la tipología en formas de dependencia en: Cardoso, F.H. y Faletto, E.: *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México, Siglo XXI, 3a. edición, 1971.
- ² Furtado, Celso.: *La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana*. Santiago, Editorial Universitaria, 1970, pág. 40.
- ³ Cardoso, F. y Faletto, E.: *Dependencia y...*, *op. cit.*
- ⁴ El surgimiento de una burguesía industrializante orientada hacia el mercado interno fue el resultado de las políticas desarrollistas y proteccionistas puestas en marcha bajo la "regla portaliana".
- ⁵ Véase Humud, Carlos.: *El sector público chileno entre 1830-1930*. Santiago, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, Memoria, 1969, pp. 180 y ss.
- ⁶ En 1912, Emilio Recabarren organizó en Iquique el Partido Obrero Socialista, que diez años más tarde se convertiría en el Partido Comunista Chileno. Surgido en el espacio de un sindicalismo autónomo, de composición minera, se constituyó en el primer partido obrero chileno y el principal representante de los obreros del enclave.
- ⁷ Petras, James.: *Política y Fuerzas Sociales en el Desarrollo Chileno*. Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1969, pág. 149.
- ⁸ Para un análisis del modelo político colombiano véase: Pécaut, Daniel: *Política y Sindicalismo en Colombia*. Bogotá, Ed. La Carreta, 1973.
- ⁹ El caso de México no nos parece incluíble en una categorización tan gruesa. Allí, la estabilidad política lograda después de la revolución aparece asociada a la consolidación de un Estado fuerte que ejerció el control sobre los sectores populares y sus organizaciones de clase, y un sistema político que no se constituyó en vehículo de la desactivación política. Véase: Labastida, J.: "Algunas hipótesis sobre el modelo político mexicano y sus perspectivas", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, IIS, Año XXXVI, Vol. XXXVI, No. 3, Julio-Septiembre de 1974, pp. 629-642.
- ¹⁰ Faletto, Enzo.: *Clases sociales, crisis política y problemas del socialismo en Chile*. Santiago, FLACSO/ELAS, 1973. Mimeo, pág. 6.
- ¹¹ La Constitución de 1925 incorporó el tema obrero, pero lo hizo mutilando sus posibilidades de expresión. El código de trabajo convirtió a los sindicatos en agentes débiles en la contratación colectiva. Véase Barrera, Manuel: "Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile", en *Cuadernos de la Realidad Nacional*.

- Universidad Católica de Chile, Santiago, No. 9, Septiembre de 1971, pp. 119-155. También Angell, Alan: *Partidos Políticos y movimiento obrero en Chile*. México, Ed. ERA, 1974.
- ¹² En 1942, el 40% más pobre captaba el 9.5% de los ingresos personales. En 1948, sólo un 8.5%. El 20% más rico subió desde el 55.8% al 56.8% del ingreso total en ese lapso. Véase: Mistral, Carlos: *Chile: del triunfo popular al golpe fascista*. México, Ed. ERA, 1975.
- ¹³ Véase: Aranda, Sergio y Martínez, Alberto.: "Estructura económica: algunas características fundamentales", en: *Chile Hoy*, México, Siglo XXI, 1970, pp. 55-172, pág. 126. También: Hernández, Silvia: "El desarrollo capitalista del campo chileno", en: *Reforma Agraria y Poder Popular*. Buenos Aires, Periferia, 1973, pp. 93-145.
- ¹⁴ Faletto, E.: *Clases sociales...*, *op. cit.*
- ¹⁵ Durante el gobierno de Alessandri se promulgó una reforma Agraria "casi puramente simbólica" para mantener los *slogans* de la Alianza para el Progreso. Véase: Petras, J. y Cavarozzi, M.: "Conflicto político y dependencia económica en Chile", en: *América Latina: económica y política*. Buenos Aires, Periferia, 1972, pp. 15-94, pág. 75.
- ¹⁶ Faletto, E.: *Clases sociales...*, *op. cit.*, pág. 37.
- ¹⁷ La estrecha asociación de los sectores más modernos de la burguesía y el Estado con los consorcios internacionales constituye el rasgo definitorio de este modelo de desarrollo. Véase: Cardoso, F.H.: *Las crisis políticas y las luchas de clases en América Latina*. Ponencia presentada en el seminario organizado por el IIS en Oaxaca, Junio de 1973. Mimeo.
- ¹⁸ Entre éstos, la movilización de los "sin casa ("los pobladores"), constituyó uno de los ejes principales de la base demócrata-cristiana.
- ¹⁹ En 1969 se desprendió el ala izquierda de la DC, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que pasaría a integrar la Unidad Popular.
- ²⁰ Véase: *Programa Básico de la Unidad Popular*. Varias ediciones.
- ²¹ Esta es la idea que sostiene Alain Touraine en su libro: *Vie et mort du Chili Populaire*. París, Seuil, 1974.